

“Hemos presentado un proyecto de ley para que todas las personas reciban una solución a sus deudas educativas (CAE, Fondo Solidario de Crédito Universitario y Corfo) de acuerdo con su realidad. El proyecto propone también reemplazar los actuales créditos estudiantiles por un nuevo instrumento de Financiamiento público para la Educación Superior (FES) moderno y eficiente”.

De esta forma, el Ministerio de Educación presenta en internet una iniciativa legal que se tramita en el Congreso para responder a un compromiso de gobierno relativo a deudas educacionales. Sin embargo, para el rector de la Universidad Viña del Mar (UVM), Carlos Isaac, se trata de un proyecto de ley que arriesga de forma severa los planes de desarrollo de las universidades privadas.

¿En qué consiste este proyecto de ley del FES?

Este es un proyecto de ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que es el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior y que reemplaza al CAE, que está próximo a cumplir 20 años.

Es una promesa de campaña que cambia el sistema a uno completamente estatal, donde los estudiantes tienen que pagar un impuesto durante un periodo de tiempo bastante largo una vez que estén titulados, para devolver lo que se gastó en su educación.

Muchos estudiantes, a partir de este impuesto, van a tener que pagar mucho más de lo que costó su educación en la

universidad, porque va a ser un impuesto fijo, un cierto porcentaje de sus ingresos, durante 20 años. Dependiendo de los ingresos, puede llegar a costar 3 o 4 veces lo que finalmente el Estado colocó para su educación.

La condonación al CAE ha estado sobre la mesa hace mucho tiempo y eso ha hecho que la morosidad de este crédito haya aumentado un 40% en los últimos cinco años. La gente dejó de pagarlo porque está esperando el “perdonazo”.

En lo concreto, ¿qué significa este proyecto de ley para las universidades privadas?

A todas las universidades las golpea. Esta ley, a diferencia del CAE, lo que incorpora es que las familias no puedan aportar un complementario. Y si uno suma lo que ocurre en todas las universidades privadas, tiene un impacto del orden de 300 mil millones de pesos al año.

Se verán más afectadas las universidades privadas porque las estatales ya tienen un aporte basal asegurado que tienen todos los años. Ellas no parten de cero cada año como lo hacemos las privadas.

¿Las universidades privadas ven al FES como una suerte de “competencia desleal”?

Las universidades privadas han sido fundamental para el desarrollo de la educación superior en Chile, eso ha permitido que tengamos cobertura de educación superior en el país dentro del promedio que tienen los países de la OCDE.

Además, la calidad de la universidad en Chile es



Dura crítica de rector UVM a nuevo proyecto de financiamiento de la educación superior que impulsa el Mineduc

Acerca del FES, que reemplazaría al Crédito con Aval del Estado (CAE), Carlos Isaac indica que los estudiantes pagarán 3 o 4 veces lo que el Estado invirtió en sus carreras. Se afectarían en la región, al menos, 20 mil familias.

muy buena, en los niveles latinoamericanos siempre aparecen bien posicionadas en los rankings.

Dicho lo anterior, siempre ha habido un poco de competencia desleal porque las universidades que tienen aportes basales y que igual cobran aranceles, tienen aranceles regulados más altos. Es difícil competirles.

En términos concretos, esta limitación de recursos que tendrían las universidades privadas, ¿en qué se traduciría?

Se limitan recursos en una serie de dimensiones, como menor cantidad de profesores con doctorados, menor cantidad de campus, menos investigación, menos intercambio. Las universi-

dades privadas ya somos eficientes en el uso de los recursos, entonces inevitablemente esto afecta el proyecto educativo.

Si ya es difícil lograr acreditaciones institucionales ¿ahora debiera ser más complejo?

Así es. La acreditación está muy influida por la cantidad de docto-

res que tenga una universidad, las investigaciones, la presencia en la sociedad y eso se va a ver afectado, sobre todo con los proyectos más inclusivos, como el caso de la Universidad Viña del Mar que atiende a todos los sectores de la sociedad.

Y aparece también otro efecto: va a haber una mayor segregación de las universidades, no van a querer estar sometidas a este sistema porque quita autonomía y, finalmente, no se van a adscribir. Solamente van a atender estudiantes que puedan pagar sus estudios completos.

¿Cuál es la sensación que existe al interior de la universidad?

Hay mucha preocupación. Hemos estado en contacto con el Ministerio de Educación, con los parlamentarios a quienes les hemos entregado minutos y propuestas, pero hasta ahora no se ha aceptado ninguna.

A los titulados, por ejemplo, les va a convenir no tener contrato para no tener que pagar este impuesto y, finalmente, la plata no se va a devolver al Estado. Nosotros tenemos serias dudas de que vaya a ser autosustentable.

¿Hay alguna estimación del grado de afectación?

Estamos agrupados bajo la Corporación de Universidades Privadas, que son 16 universidades y representan el 30% del sistema universitario. Acá en la región deben ser, al menos, 20 mil familias las que se pueden ver afectadas porque están en estas universidades y van a tener que pagar estos impuestos a futuro.